

¿Quién Puede Perdonar a Quién?

La Arrogancia del Poder

- ★ Su Punto Débil: ser Baluarte de la no Democracia
- ★ Legitimidad y Viabilidad, Sólo con la Negociación
- ★ Raíces Centenarias de la Insurrección Chiapaneca

LORENZO MEYER

La del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido pintada por unos como una rebelión fuera de tiempo, estertor nostálgico de un pasado que no puede ni debe ser. Quizá, pero también hay elementos que pueden llevar a la conclusión contraria: la del EZLN es la primera rebelión posmoderna de América Latina. La primera que nace no sólo en el poscomunismo, sino también, y esto es lo importante, en el posanticomunismo. Un mundo donde ya

SIGUE EN LA PAGINA DIECINUEVE

no hay dogmas que atañan, pero también uno donde ya no se puede descalificar a los rebeldes como "instrumentos de la URSS" ni al poder establecido legítimamente como "baluarte de la democracia".

El punto débil del sistema de poder en México reside en que este poder es, justamente, un baluarte de la no democracia. Lo que es aquí el sistema dominante, lo sabemos todos o casi todos. Una encuesta hecha estos días a una muestra representativa de habitantes de la ciudad de México —el *melting pot* mexicano—, encontró que 71% de los consultados considera que el voto ciudadano no se respetará en 1994 (Adip Sabag, *El Financiero*, 24 de enero). La autoridad en México se ejerce, pues, dentro de un marco que carece de legitimidad; eso lo sabía, entre otros, el EZLN.

En el mundo anterior a la desaparición de la URSS, el autoritarismo anticomunista era, en la práctica, un valor superior a la democracia. En el mundo posmoderno y posanticomunista, ese ya no es más el caso. El EZLN se dio cuenta de tamaño hecho histórico y apuntó al flanco antidemocrático de su enemigo. Hoy podemos constatar que hasta las balas imaginarias del joven guerrillero indígena que murió en Ocosingo luchando con un rifle de palo, dieron en el blanco.

La magnitud del daño que hizo en la endeble base

moral de la política mexicana —el autoritarismo con mayor antigüedad en el planeta, y por ello, hoy, uno de los menos defendibles— la insurrección de un grupo organizado de campesinos pobres e indígenas, se puede apreciar por medio de un indicador particularmente revelador: la controversia del perdón entre el EZLN y el Supremo Gobierno.

En apenas trece días, el gobierno pasó de tener la iniciativa y exigir una rendición incondicional a cambio de un posible perdón a algunos de sus enemigos indígenas en Chiapas —a los que se hubieran rebelado "por engaño, presiones o aun por desesperación"—, a quedar a la defensiva, y aceptar, por voz de su comisionado para la Paz que: "nadie puede colocarse por encima de los demás para perdonar cuando han ocurrido tantas cosas que no debieron haber ocurrido durante tantos años".

El 6 de enero, el Presidente, tras ordenar al Ejército Federal desatar una ofensiva sin restricciones contra "los transgresores", se dirigió a los rebeldes que en ese momento luchaban aún en Huixtán, Tzontehuitz y en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas, y les ofreció buscar para algunos de ellos "un trato benigno y, aun consideraremos el perdón" si deponían las armas. Los perdonables simplemente ignoraron el llamado. Trece días más tarde, el propio comisionado presidencial para la

paz, Manuel Camacho, cambió el signo del perdón: "Es necesario, dijo en San Cristóbal, pedir perdón a los indígenas, a las comunidades, por todo el sufrimiento que han vivido, y llegó el tiempo de ya no molestarnos unos a otros".

Justo entonces llegó, por fin, la respuesta del EZLN por medio de una carta de largo caminar del subcomandante Marcos, con fecha del 18 de enero. En ella, y en nombre de los rebeldes, preguntó: "¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo? ¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte 'natural', es decir, de sarampión, tos ferina, dengue, cólera, tifoidea?"

Frente a esa muralla de preguntas —las verdaderas balas del EZLN—, el comisionado para la Paz prefirió rodearla, alejándose del tema del perdón y propuso dejar ya el campo de

la moral y la legitimidad, para entrar de lleno en ese que el gobierno sí conoce, pues es el único en el que se mueve: el de la política como mera relación de poder. El EZLN aceptó pero el tiempo ha pasado y nada se ha concretado.

Las causas profundas de la insurrección chiapaneca tienen raíces centenarias y difíciles de extirpar en el corto plazo, pero las causas inmediatas no son tan añejas; por ahí se debe iniciar la tarea de desenredar la madeja. Estas últimas tienen que ver con los procesos políticos, es decir, con la forma en que la élite gobernante actual —cerrada como pocas— ha ejercido su poder. La forma salinista de gobernar se puede calificar no sólo de autoritaria —no conoce otra forma— sino, además, de prepotente. Y la prepotencia ha sido particularmente visible en su trato con aquellos que se negaron a reconocerle la legitimidad que no pudo conseguir en las urnas, en 88, cuando "se cayó el sistema".

En más de un sentido, la actual administración ha sido el arquitecto del drama chiapaneco, que es ya también nacional. El grupo salinista, heredero directo de la cultura y las formas autoritarias posrevolucionarias, no pudo asumir con credibilidad el poder que Miguel de la Madrid le legó, un poder ya muy desgastado por su ejercicio monopólico. Una elección ganada sin credibilidad, no impidió a los jóvenes gobernantes tecnócratas instalarse cómodamente en el poder y consolidarse aprovechando los últimos momentos del anticomunismo. La élite económica mexicana e internacional, la Iglesia y los gobiernos de Estados Unidos, más Europa Occidental y Japón, apoyaron instintivamente al sistema tradicional mexicano para evitar

lo que definieron como el mal mayor: un cardenismo al que se vio como cabeza de playa del viejo enemigo comunista.

Por la vía de los hechos, y presentando a Cuauhtémoc Cárdenas como el abanderado de una izquierda moribunda pero aún peligrosa, el salinismo actuó frente a la sociedad mexicana y al mundo, como si no hubiera más camino que el suyo. Compartió pequeñas parcelas del poder únicamente con aquella oposición —el PAN— que aceptó no cuestionar ni su legitimidad ni su proyecto de reforma económica; una reforma que, en la práctica, permitió a unos pocos ganar mucho y mucho, mientras al gran to lo puso en la lista de espera.

La práctica electoral de "dados cargados" del neoliberalismo mexicano, incluye muchas cosas que en el posmodernismo posanticomunista han perdido legitimidad y efectividad, entre otras, la preservación de un partido de Estado (PRI), la permanencia por trece lustros de un mismo partido en el poder, el fraude sistemático, la imposición a la sociedad de la disciplina neoliberal, el control más o menos abierto de los medios masivos de comunicación, el uso de los recursos para combatir la pobreza (Solidaridad) para reforzar estrategias electorales del partido del Estado, la solicitud de cantidades estratosféricas (más de medio centenar de millones de dólares) a los beneficiarios del neoliberalismo para financiar a ese partido, etcétera. Todo lo anterior condujo a la oposición real a un callejón casi sin salida, pero también, y ahora lo vemos, abonó el suelo para dar legitimidad a una rebelión abierta en un ambiente donde la defensa anticomunista del poder establecido está moribunda.

Si la vía electoral era una lucha desigual —el PRI cuenta con todos los recursos del Estado y el Estado controla todo el proceso electoral—, que generalmente hunde al opositor que no “concierta”, entonces ¿qué hacer? El PRD y el cardenismo, empeñados en usar sólo instrumentos legales y pacíficos, se decidieron por volver a apostar por la vía electoral, confiando que en 1994 será posible, mediante la movilización masiva poselectoral, evitar que se repita el 88.

En contraste con el cardenismo, hubo otro grupo, ahora lo sabemos, de raíz más local pero con la mirada abierta al ancho mundo, que ante la disyuntiva de jugar con un contrincante que carga los dados en una zona rural dominada por la brutalidad del caciquismo político o desistir de toda acción política, se decidió por una tercera vía: reemprender un camino que muchos considerábamos ya cancelado: el de la fuerza, el que en el pasado sólo había conducido al sacrificio y a la violencia inútiles.

La diferencia de la lucha armada del pasado inmediato y la actual, ahora se ve, es que el EZLN va en realidad por un camino nuevo, lo cual, desde luego, no garantiza su éxito. Ese camino es uno donde no hay apoyos de internacionales comunistas, pero donde la sociedad civil se siente libre de opinar, juzgar a las partes en conflicto, según su propia experiencia, novilizarse e intervenir. Eso lo sabe el EZLN, y así lo dice su comunicado del 20 de enero. En este nuevo mundo, las partes son, por lo menos, tres: el Supremo Gobierno, el EZLN, y todos los demás que organizada o individualmente, y en ejercicio de nuestros débiles pero crecientes derechos ciudadanos, nos manifestamos

en torno del conflicto: sus causas y posibles soluciones.

La experiencia mexicana y universal nos dice que la pobreza y la injusticia, por sí mismas, no llevan a la insurrección contra el orden establecido, pues si ese fuera el caso, nuestro país, y todo el Tercer Mundo vivirían en guerra civil permanente. La pobreza desemboca en violencia sólo cuando se combina con elementos de liderazgo y esperanza, es decir, cuando los pobres consideran que tienen la posibilidad de ganar algo que de otra manera no podrían; cuando perciben su situación como intolerable por ser el resultado de la acción injusta e ilegítima de hombres e instituciones concretas y que son vulnerables. Por mucho tiempo, la irresponsabilidad y la prepotencia del poder establecido, permitieron crear en Chiapas el clima necesario para que surgiera un liderazgo que aún no conocemos, pero que logró convencer a una grupo de marginados que la fuerza era la única llave para salir del hoyo material y moral en el que se encontraban. Es en este sentido que el gobierno fue el principal arquitecto de la tragedia.

La rebelión de Chiapas se nos parece, aquí y en el extranjero, como una de hombres y mujeres pobres en extremo, pertenecientes a etnias discriminadas, en un país donde el poder llevó a que un neoliberalismo amafiado permitiera acumular fortunas familiares superiores, incluso, a cinco mil millones de dólares al lado de miseria masiva, y donde, finalmente, no existe la vía democrática ni la alternancia en el poder puede ser usada para disminuir tensiones y conducir los inevitables conflictos de intereses sociales por la vía pacífica. El EZLN, nos lo acaba de decir (comunicado del 20 de

enero) no busca tomar el poder, imponer un sistema político predeterminado ni siquiera supone que su forma de lucha y organización sea la mejor para todos, simplemente considera que es la única con la que ellos pudieron contar, para buscar algo enteramente compatible con los valores posmodernos: libertad, democracia y justicia.

En el mundo posanticomunista no es ya válido el exterminio de un opositor que tiene razones válidas para su acción y que ni puede ni busca el exterminio de su contrario (el general Absalón Castellanos, su prisionero, no fue ajusticiado, simplemente puesto a trabajar). Por tanto, la única solución compatible con los valores hoy dominantes aquí y en el resto del mundo, es la negociación. Ojalá así lo entiendan los responsables.